

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por JHON JAIRO GUERRA MONTOYA en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (Radicado 05001-31-05-009-2019-00683-01).

ANTECEDENTES

El demandante pretende le sea reconocida una pensión de vejez a partir del cumplimiento de los requisitos con cargo a su cuenta de ahorro individual, a razón de \$2.740.600 por cada mensualidad, y que la entidad solo exija los requisitos legales; que se sancione la morosidad y mala fe de la accionada conforme lo previsto por el artículo 22 del Decreto 656 de 1994 o, en subsidio, el artículo 21 ibídem o, en subsidio, que se comunique a la Superfinanciera su deber de investigar y sancionar a la demandada, de conformidad con las normas señaladas; la indexación y las costas del proceso.

Como fundamento a sus pedimentos expuso, luego de subsanar los requisitos de la inadmisión, los siguientes: demostró haber consignado en

su cuenta de ahorro personal \$754.442.010, y haber hecho cotizaciones por 1298 semanas; ante la accionada demostró haber cumplido los 62 años desde el 12 de julio de 2018, por lo que solicitó en forma reiterada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez; fue sometido a una cirugía de corazón abierto el 29 de enero de 2018, por lo que quedó padeciendo cardiopatía isquémica e hipertensiva dilatada compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo 43%; el 13 de marzo de 2019 procedió a la redención del bono pensional por y ante un funcionario de Porvenir, ligando en forma expresa los dineros derivados de ese bono a su pensión de vejez; no obstante al volumen de la cuenta de ahorro individual y del número de semanas cotizadas, la entidad demandada se ha negado a reconocerle la pensión de vejez, con el argumento de que debe presentar copia del registro civil de nacimiento de su cónyuge, pese haberle demostrado con copia del certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil que tal documento no existe.

Porvenir S.A. atendió de manera oportuna el libelo, oponiéndose a la prosperidad de la casi totalidad de las pretensiones. Negó la mayoría de los hechos que hacen referencia al derecho pretendido, indicando que el accionante no presentó solicitud deprecando la pensión de vejez sino el de conformación de historia laboral, que es uno de los requisitos para que una vez el afiliado solicite el reconocimiento de la pensión de vejez, se encuentre efectuado el trámite del bono pensional cuando a ello haya derecho. Sobre los demás dijo que no le constaban. Propuso como excepciones las que denominó improcedencia de la acción por carencia de objeto, falta de causa para demandar, buena fe de la entidad, prescripción y compensación.

En sentencia del 1° de septiembre de 2022, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a PORVENIR S.A a reconocerle y pagarle al señor JHON JAIRO GUERRA MONTTOYA la pensión de vejez definitiva, establecida en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, liquidada bajo los parámetros legales, financieros y la nota técnica respectiva. ABSOLVIÓ a

la entidad de las demás pretensiones formuladas en su contra por la parte actora. Por último, le impuso las costas a PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de un (1) SMLMV.

La parte actora inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el cual le fue concedido. Como argumentos expone que se está omitiendo lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 656 de 1994, en el sentido de que al haber mora en el reconocimiento de la pensión se le debe de reconocer al afiliado una con carácter de provisional. Indica que la ley establece para el reconocimiento de las prestaciones que se presente una solicitud, más no que se tenga que diligenciar un formato. Refiere que se está obligando al demandante a cometer un ilícito en el sentido de exigirle un documento que no existe como lo es el registro civil de la cónyuge, además que en reemplazo se adjuntó el registro civil de matrimonio, por lo que señala que las costas resultan absurdas ante la exigencia de un documento que jurídicamente no existe.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico consiste en determinar si en el asunto de marras resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 656 de 1994, así como si resulta procedente en esta etapa del proceso analizar la cuantía de las costas procesales impuestas.

Existe plena prueba en el expediente que el demandante nació el 12 de julio de 1956; que contrajo matrimonio católico con la señora María Eugenia Diez Mejía el 22 de marzo de 1980; que el 31 de agosto de 1994 diligenció un formulario de vinculación ante Horizonte Pensiones y Cesantías -hoy Porvenir S.A.-, siendo efectiva su vinculación a la entidad a partir del 1° de

septiembre de 1994; que el 13 de marzo de 2019, suscribió el formulario para el “*Trámite de Emisión y/o Expedición de Bono Pensional*”, conforme a la confirmación de la historia laboral que realizó en igual data, bono que le fue reconocido y pagado el 30 de abril de 2019; aparece registro que el accionante al 30 de septiembre de 2019 tenía un total de 1298 semanas cotizadas y un capital ahorrado de \$754.442.010, plasmado en el extracto expedido por la demandada.

A partir de ello y para resolver, debe decirse que el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, soporte del recurso de apelación, específicamente consagra lo siguiente:

“Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.

Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.

En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.

PARAGRAFO. *Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicios de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo.*

A su vez, el artículo 19 de la misma disposición señala que:

“El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.

Ahora bien, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, expresamente dispuso:

“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el petionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte (subrayas fuera del texto).

Bajo estas orientaciones, se descende al caso concreto encontrando que existe evidencia en el plenario que el accionante diligenció el formulario para dar inicio al trámite de emisión y/o expedición del bono pensional el 13 de marzo de 2019; así mismo, obra poder que este le confirió al abogado Oscar de Jesús Tobón Builes, con reconocimiento de contenido del 13 de mayo de 2019, *“...para que en mi nombre y representación defienda mis derechos e intereses antes esa Entidad (y las demás que lleguen a conocer de este asunto) con motivo de mis peticiones para que se declare mi derecho a pensionarme ante esa Administradora de Pensiones y se haga la respectiva liquidación del caso”*.

Por su parte, obran comunicaciones de Porvenir S.A. dirigidas al señor Guerra Montoya en la que inicialmente le indican que se encuentran *“...adelantando los trámites necesarios para que su historia laboral esté correcta y completa; finalizado este proceso le informaremos el resultado y los pasos a seguir a más tardar en 180 días”*, comunicación que está fechada el 28 de marzo de 2019. De igual manera, se evidencia respuesta de la entidad al accionante frente a una documental allegada por su apoderado el 16 de julio de 2019 respecto de la presentación de la partida de bautismo de la cónyuge del actor, en la que le indican *“De acuerdo a la*

comunicación radicada por su apoderado el señor Oscar de Jesús Tobón Builes, donde nos adjunta copia de la partida de bautizo de su esposa María Eugenia Diez Mejía, le informamos que este soporte se debe anexar con los demás documentos que hacen parte el proceso de reconocimiento de su prestación”.

Frente a esta última comunicación no se evidencia en el plenario que el accionante haya cumplido con lo peticionado, dado que no aparece registro siquiera de un formulario deprecando la pensión de vejez, y contrario a lo señalado por el apoderado recurrente, no basta con solo la presentación de la solicitud para que la administradora reconozca el derecho, pues no puede perderse de vista lo ya reseñado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, el cual se encuentra acompasado con el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1833 de 2016, que hace referencia a la *“Acreditación de la documentación requerida como requisito para el trámite de la pensión. Para los efectos del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la obligación de los fondos encargados de reconocer la pensión, dentro del término legal establecido, procederá una vez se presente la solicitud de reconocimiento junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, a través de la cual se aprueben los presupuestos de hecho y de derecho de la norma que confiere la respectiva prestación de vejez, de invalidez o de sobrevivientes”*, de donde no resulta un capricho de la entidad el exigir la presentación completa de la documentación para realizar el análisis de la solicitud, sino el cumplimiento de un mandato legal.

Resulta extraño para esta Sala de Decisión la postura reiterada de la parte actora en cuanto a que era un imposible el acatamiento de la exigencia de Porvenir de la presentación del registro civil de nacimiento de la cónyuge del actor, por cuanto, de un lado, la certificación emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil es frente al manejo centralizado de tales documentos a partir de la expedición del Decreto 1260 de 1970, y otra muy diferente, para aquellas personas que fueron registrados antes de dicha

data, caso para el cual era necesario verificar la notaria donde haya sido registrada la persona, lugar donde seguramente se encontraba la copia del documento que era exigido, y del otro, porque se requiere por parte de la entidad conocer la edad de ésta con el fin de determinar el valor de la mesada pensional, tanto del actor como de sus beneficiarios, independiente de que la pareja se haya separado de cuerpos hace más de 17 años, pues no obra en el expediente ningún documento que acredite el divorcio de la misma.

Siendo lo anterior cierto, no se cumplen los presupuestos para dar cabida a la aplicación del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, pues solo hasta el adelantamiento de este proceso judicial, se declara el cumplimiento de los requisitos por parte del señor John Jairo Guerra Montoya para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de la accionada, dando lugar entonces a la confirmación de la sentencia en este asunto.

Ahora bien, frente al reparo de las costas procesales, específicamente en lo concerniente a las agencias en derecho fijadas por el juez de instancia, debe señalarse que este no es el momento oportuno para controvertir su monto, por cuanto el artículo 366 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, indica que *“La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”*, y dado el estado en que se encuentra el proceso, es claro que aún no se surtido el trámite correspondiente para interponer los respectivos recursos.

Sin más consideraciones, la sentencia venida en apelación habrá de ser confirmada. Las costas de la instancia estarán a cargo de la parte recurrente, dado que su recurso no prosperó (art. 365-1 del CGP). Como agencias en derecho se fija la suma de medio SMLMV.


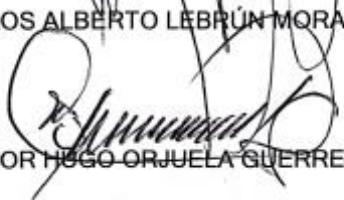

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio SMLMV.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500920190068301
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JOHN JAIRO GUERRA MONTOYA
Demandado: A.F.P. PORVENIR S.A.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 2/08/2023
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 3/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario